



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, febrero 2 de 2023

Radicado: 05001 31 05 009 2022 00476- 01
Accionante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Accionado: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS
USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA
Asunto: PROCESO EJECUTIVO -MANDAMIENTO DE PAGO

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir la providencia dentro del proceso ejecutivo laboral de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

La entidad accionante acude al trámite ejecutivo laboral pretendiendo se libre mandamiento de pago en contra de LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA a efectos de obtener de esta la satisfacción de la condena que fuera emitida de forma solidaria contra esta entidad y el ICBF por concepto de acreencias laborales dentro del proceso ordinario laboral de radicado 05001-31-05-009-2015-00956, señalando que en virtud de las condenas emitidas en este trámite pagó la suma de \$283'277.633, los que fueron dejados a órdenes del Juzgado 9 Laboral del Circuito de Medellín.

Bajo tal premisa se reputa como subrogataria de las condenas del trámite ordinario laboral en virtud del artículo 1666 del CC y pretende el reconocimiento de \$283'277.633 con sus intereses de mora y costas del trámite de ejecución, adosando como documentos base de ejecución las sentencias emitidas en primera y segunda instancia, la resolución N° 3755 de julio 27 de 2022 por medio de la cual el ICBF ordena el cumplimiento de la sentencia y como comprobante de pago adosó la imagen de depósito judicial en la cuenta judicial 050012032009 del Juzgado 9° Laboral del Circuito de Medellín.

En providencia del 21/11/2022 el despacho de origen se abstuvo de dar trámite a la solicitud de ejecución, argumentado la inexistencia de un título en favor de la ahora reclamante, toda vez que la sentencia que pretende ejecutar no contiene una obligación en favor del ICBF, no es posible establecer una fecha de vencimiento de la obligación para dar inicio a su cobro, como tampoco da cuenta de una suma determinada que pueda ser ejecutada, destacando que los *“documentos que acreditan una obligación en cabeza de los demandantes y en contra de la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil “Caperucita” y del I.C.B.F. en la condición de responsable solidario, es decir que dicho documento no contiene una obligación que vaya dirigida en contra de la Asociación y a favor del I.C.B.F., lo que significaría permitir, en este caso, que el I.C.B.F, se beneficie o se favorezca de una demanda en su propia contra para perseguir algo en lo cual no podría fungir como ejecutante”* (archivo N° 2)

Inconforme con la decisión fue recurrida por el ICBF indicando que dentro del proceso ordinario laboral con ocasión del reconocimiento de acreencias laborales se condenó a esta entidad como obligado solidario y en tal condición realizó el pago de los emolumentos ordenados en la sentencia a través de un depósito judicial por valor de \$283'277.633 condición que a voces de los artículos 1666, 1668 y 1670 del CC hacen del ICBF subrogatario de la obligación en contra de la deudora principal que lo es la asociación de padres de familia que se acciona, pudiendo ejercer la mismas acciones que estuvieran en cabeza de los acreedores

destacando que las sentencias contienen obligaciones claras, expresas y exigibles (archivo N° 3)

ALEGATOS

Concedido el término de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, ninguna de las partes presentó escrito.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos objeto de apelación, corresponde a esta corporación determinar la viabilidad de adelantar un trámite ejecutivo teniendo como documentos base de recaudo o título ejecutivo las sentencias emitidas dentro del proceso ordinario 05001-31-05-009-2015-0000956, al igual que los documentos que dan cuenta del pago por consignación de la suma de \$283'277.633.

Pues bien, al respecto resulta necesario detenerse en las premisas legales que ilustran este caso, a saber: el artículo 100 del CPTSS y del artículo 422 del Código General del Proceso.

El artículo 100 del CPTSS refiere que es exigible a través del trámite ejecutivo *“toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”* a su turno, el artículo 422 del CGP indica como presupuestos de la acción ejecutiva, la existencia de *“obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él...”*

Descripción que revela los elementos mínimos que debe contener aquel documento o acto que se pretenda para cumplimiento a través del proceso ejecutivo laboral y que se sintetizan en tres aspectos primordiales a saber: 1) una obligación expresa, 2) clara y 3) actualmente exigible.

Se trata de requisitos que han de reunirse de forma conjunta y suficiente y a través de los cuales se decantan aquellos reclamos donde no se discute la existencia de una obligación, tampoco está en duda los sujetos obligado (s) y beneficiario (s), se tiene certeza en el monto adeudado y/o obligación debida, así como la fecha de exigibilidad. Reclamaciones donde es inane la discusión sobre la configuración de la obligación, pues tales elementos se establecieron con suficiencia en un documento que se presenta como base de recaudo.

Ahora bien, respecto a los requisitos expuestos, ilustrativa es la decisión de la Sala de Casación Civil de la CSJ del 24 de junio de 2021, donde se describió el contenido de los presupuestos del título valor, indicando que una **obligación es clara** cuando su contenido es inequívoco, no es oscuro y por tanto no es susceptible de interpretaciones disímiles. Define la **expresividad de la obligación** como la suficiencia de los términos en que se consigna sin que sea menester acudir a teorías o hipótesis, sino que es diáfana la manifestación del deudor en favor del acreedor. y en cuanto a la **exigibilidad**, consiste en la posibilidad de reclamar la satisfacción de la obligación dada la expiración del plazo o cumplimiento de la condición que mediaba para obtener su satisfacción. Así indicó la alta corporación:

“Los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos, consignados en el artículo 422 del Código General del Proceso, relativos a tratarse de un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, por supuesto se trasladan a los títulos valores y, en esa medida, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no puede seguir adelante el cobro coercitivo (...).”

“(...) La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo (...).”

“(…) La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida (…)”¹.

Recientemente, sobre esa temática, la Corte adocrinó:

“(…) Tocante al carácter de la expresividad del documento adosado como báculo del compulsivo, la obligación que se pretende ejecutar con fundamento en su contenido incumple esa condición, pues no basta estar inserta por escrito o, derivarse de la confesión ficta, por cuanto debe obrar una manifestación del deudor, en favor del acreedor, de cumplir con un propósito preciso, puntual y, concreto, que no requiera de intrincadas elucubraciones sobre los pormenores del compromiso”.

“Aun cuando ello se puede lograr con varios documentos, es decir, el caso del título complejo, tal cuestión significa que, al articularlos, la obligación surja prístina; por tanto, si en conjunto, se requiere efectuar una interpretación más allá del tenor literal del contenido de la obligación de dar, hacer, no hacer o, de suscribir documentos, estará insatisfecho el requisito expreso del título”.

“Se destaca, tal rasgo del título puede obtenerse de la confesión directa o ficta del deudor, siempre que ello surja de un interrogatorio de parte, cuyo fin sea insertar una obligación en un documento para demandar su cumplimiento, según lo permite el artículo 422 de la Ley 1564 de 20122, al remitir al canon 184 de la misma obra³”.

¹ CSJ. STC3298-2019 de 14 de marzo de 2019, exp. 25000-22-13-000-2019-00018-01.

² “(…) Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. **La confesión** hecha en el curso de un proceso no **constituye título ejecutivo**, pero **sí** la que **conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184** (…)” (énfasis adrede).

³ “(…) Artículo 184. interrogatorio de parte. **quien pretenda demandar** o tema que se le **demande podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. En la**

“Así, en definitiva, lo expreso implica que el documento revele, exponga y evidencie, la intención inequívoca de someter bajo su influjo al deudor de realizar una actividad positiva o negativa, en beneficio del acreedor”.

“No basta que la obligación sea vertida en un documento, pues el compromiso ejecutable apareja un ejercicio bien especificado que, en caso de incumplirse, el cartulario automáticamente sirva de soporte para materializarlo de manera inmediata, una vez verificado el incumplimiento”.

Por otra parte, atendiendo a los matices de esta discusión, pertinente es indicar que en tratándose de deudores solidarios, donde no se establece la porción o cantidad debida por cada uno de los obligados puede exigirse a cada uno de los deudores el total de la deuda (artículo 1568 CC).

La Solidaridad en el cumplimiento de la obligación permite que una vez se satisfaga la obligación por alguno de los sujetos en el extremo deudor, este se subroge o tome la posición de la parte acreedora, permitiéndole ejercer todas las acciones con todos los privilegios y seguridades, así establece el artículo 1579 del CC:

“ARTICULO 1579. <SUBROGACION DE DEUDOR SOLIDARIO>. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda...”

Con estos contornos se descende al **caso concreto** siendo menester indicar que la sentencias que se ejecutan definen con claridad la posición en que obran las partes acá implicadas, donde se estableció la calidad de empleador de la Asociación de padres de familia respecto a las accionantes. De igual forma se explicó la participación y responsabilidad del ICBF, derivada de la condición de beneficiaria de la labor prestada, lo que no coincide con la calidad de empleador,

*solicitud indicará concretamente lo que pretenda probar **y podrá anexar el cuestionario, sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en la audiencia** (...)*” (se destaca).

pero que para efectos de garantía en el pago de las acreencias laborales a este tercero se le hace responsable en la satisfacción de las acreencias, así indicó la sentencia emitida por esta corporación:

“En este sentido relevante es la posición de la Sala de Casación Laboral de la CSJ que indica que la solidaridad que consagra el artículo 34 del CST, no genera una condición de empleador en el beneficiario de una obra, sino que comporta una garantía de satisfacción de los derechos laborales para el trabajador, en tanto permite que estas acreencias sean perseguidas frente al empleador, como respecto a aquel que se benefició de los servicios del trabajador, sin que se analice en este último el obrar que lleva a la imposición de sanciones o indemnizaciones, pues se itera, la solidaridad tiene como propósito garantizar la correcta satisfacción de las obligaciones laborales. Al respecto la sentencia SL 751 de 2021 que a su vez se remite a aquella del 6 de mayo de 2005 radicado 22905 ...

Se destaca además que ni el juez de primera instancia, ni este juez colegiado señalaron un plazo para el cumplimiento lo que genera que su solución sea inmediata, sin estar sometida a alguna condición o tiempo de gracia para su satisfacción.

Ahora bien, verificados los documentos que aduce el ICBF como contentivos del título ejecutivo es claro que se trata de un título complejo o compuesto, así:

- Se integra por las sentencias que declaran una obligación en favor de 8 ciudadanas a quienes se les reconoció el carácter de trabajadoras del hogar infantil caperucita, con una discriminación de pagos a reconocer, unos de ellos ciertos (salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones), otros determinables (pago de aportes a seguridad social, liquidación de intereses de mora) donde se presentó con claridad los elementos para su cuantificación.
- Para demostrar la satisfacción de la obligación se adosó la resolución N° 3755 de julio 27 de 2022 que discrimina los valores a reconocer a cada una de las 8 demandantes, totalizando la suma de \$283.277.633 mismo valor que

corresponde al transferido a través de depósito judicial a la cuenta del juzgado 9 Laboral del Circuito de Medellín el 4 de agosto de 2022.

Procedió esta corporación a comparar el contenido de la resolución N° 3755 de 2022, específicamente la asignación de valores para cada accionante identificando que corresponde a las condenas emitidas en las sentencias del proceso ordinario, donde el total de \$283'277.633 es la sumatoria de las condenas por salarios, cesantías, intereses a las cesantías y la sanción por falta de pago, prima de servicio, vacaciones compensadas y sanción de que trata el artículo 65 del CST, así:

	Luz María Flórez Ochoa	Luz Marina Ríos	Amada Elena Arboleda Vélez	Adriana Marcela Marín Álvarez	Lina María Montoya Sánchez	Luz Elena Vanegas Vanegas	María de Carmen Zapata	Diana Milena López Herrera
salario	\$ 2.295.525	\$ 2.750.025	\$ 3.003.000	\$ 770.025	\$ 2.292.525	\$ 1.607.475	\$ 2.292.525	\$ 1.539.975
cesantías	\$ 648.181	\$ 550.000	\$ 909.715	\$ 217.710	\$ 648.181	\$ 454.504	\$ 648.181	\$ 334.159
intereses a las cesantías	\$ 54.980	\$ 33.000	\$ 77.164	\$ 18.467	\$ 54.980	\$ 38.552	\$ 54.980	\$ 21.752
sanción intereses cesantías	\$ 54.980	\$ 33.000	\$ 77.164	\$ 18.467	\$ 54.980	\$ 38.552	\$ 54.980	\$ 2.752
Prima	\$ 229.250	\$ 275.000	\$ 321.750	\$ 77.000	\$ 229.250	\$ 160.750	\$ 229.250	\$ 154.000
Vacaciones	\$ 324.090	\$ 275.000	\$ 454.858	\$ 108.855	\$ 324.090	\$ 227.252	\$ 324.090	\$ 167.079
Art. 65 CST	\$ 22.008.000	\$ 26.400.000	\$ 30.088.000		\$ 22.008.000	\$ 15.432.000	\$ 22.008.000	
Total conforme a la sentencia	\$ 25.615.006	\$ 30.316.025	\$ 34.931.651	\$ 1.210.524	\$ 25.612.006	\$ 17.959.085	\$ 25.612.006	\$ 2.219.717
valores adicionados en la resolución 3755 de 2022 - complemento art 65 CST	\$ 5.301.400	\$ 5.800.315	\$ 7.119.997	\$ 28.942.673	\$ 5.301.400	\$ 3.353.961	\$ 5.301.400	\$ 57.883.467
Total por accionante	\$ 30.916.406	\$ 36.116.340	\$ 42.851.648	\$ 30.153.197	\$ 30.913.406	\$ 21.313.046	\$ 30.913.406	\$ 60.103.184
SUMATORIA \$ 283.280.633 VALOR CONSIGNADO \$283.277.633 DIFERENCIA: \$ 3.000								

En cuanto a las accionantes Amanda Arboleda Vélez y Diana Milena López la sentencia de primera instancia fijó los criterios de cuantificación de la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST, esto es \$10.267 y \$20.533 diarios respectivamente, corridos desde el 1° de octubre de 2014. Luego el ICBF tomó como hito final el 29 de julio de 2022, empero los cálculos que efectúa la resolución 3755 de 2022 contiene con una diferencia negativa de \$400.413 para Adriana Vélez y de \$1'419.870 en exceso para Diana Milena López, además de una ligera diferencia en la sumatoria de\$3.000

Además, existe certeza del pago de \$283.277.633 mediante depósito judicial del 4 de agosto de 2022.

Las premisas fácticas expuestas permiten concluir que:

1. Los documentos presentados como base de recaudo a saber las sentencias de primera y segunda instancia, la resolución N° 3755 de 2022 emanada del ICBF y la constancia de pago a través de depósito judicial por valor de \$283.277.633 comportan un título ejecutivo complejo el que contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
 - Es clara y expresa toda vez que las sentencias discriminan los valores que corresponden a cada una de las accionantes del proceso ordinario laboral, a la vez que la resolución N° 3755 de 2022 señala la porción que del pago global corresponde a estas demandantes, sin que fuera necesario acudir a teorías o hipótesis, y por el contrario responde a una operación matemática ora de suma simple, ora multiplicaciones de factores que fueron contenidos en las sentencias.
 - Es actualmente exigible, no solo porque las sentencias no fijaron un plazo para el pago, pero además porque el ICBF demostró que desde el 4 de agosto de 2022 puso a disposición de las 8 accionantes el pago de lo que judicialmente se les reconoció.
2. Debido al pago realizado por el ICBF es clara la condición de subrogataria de las obligaciones, lo que por disposición del artículo 1579 del CC lo ubica en la calidad de acreedor frente a la plurimencionada asociación de padres de familia, que le permite ejercer todas las acciones que le incumben a las 8 accionantes en el proceso ordinario laboral, lo que incluye la posibilidad de perseguir ejecutivamente la satisfacción de la obligación.
3. La jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y en particular el Juzgado 9° Laboral del Circuito de Medellín es competente para conocer de la presente acción ejecutiva, así lo establecen los artículos 100 y el numeral 5 del artículo 2 del CPTSS, al señalar que será exigibles a través del trámite

ejecutivo el cumplimiento de las sentencias judiciales, sin que sea menester que previamente se establezca la calidad de acreedor del ICBF frente a la organización asociación de padres de familia, toda vez que este vínculo deviene de la calidad de obligadas solidarias señaladas en las sentencias del trámite ordinario, el pago que satisfizo parcialmente las condenas y que por ministerio de la Ley permite al sujeto que pagó tomar el lugar del acreedor por las obligaciones satisfechas.

4. La presente ejecución es ajena al eventual derecho de las 8 accionantes, pues quien paga entra a ocupar por mandato legal su posición frente al deudor principal para exigir la obligación hasta el monto solucionado, por tanto, no es menester que estas integren el presente trámite ya que el mismo tiene como única pretensión el reintegro de las sumas ya canceladas a saber \$283.277.633.
5. No hay lugar a librar mandamiento de pago por sumas adicionales a las contenidas en la sentencia base de ejecución, como lo son los pretendidos intereses de mora sobre los \$283.277.633 ya pagados, los que carecen de documento base de recaudo.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, REVOCA la decisión de primera instancia y en su lugar se dispone librar mandamiento de pago en favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, en contra de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTÍL CAPERUCITA (APFNUHI CAPERUCITA) por la suma de \$283.277.663 en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia, negando la ejecución por los intereses de mora sobre esta suma toda vez que no comportan una obligación objeto de cobro ejecutivo. De igual forma se libra mandamiento de pago respecto a las costas del trámite ejecutivo.

Sin costas dentro de esta instancia.

La presente providencia se notifica por estados

Se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para lo de su competencia

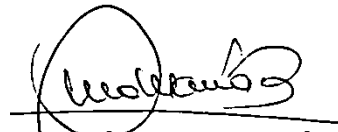
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 9 de febrero de 2023.